JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C. Septiembre seis de dos mil veintiuno.

Ref. Acción de tutela No. 1100131030272021-00355-00 de LUIS JAVIER MARTINEZ PEREZ contra JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA.

Procede el Despacho a decidir la presente acción de tutela con el siguiente estudio:

ANTECEDENTES :

LA ACCION Y EL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

El señor LUIS JAVIER MARTINEZ PEREZ actuando en causa propia, acude a esta judicatura, para que le sea tutelado el derecho fundamental al debido proceso, acceso a la administración de justicia que considera vulnerado por la parte demandada.

La tutela se fundamenta en hechos que se sintetizan, así: que Se adelanta en ese Juzgado proceso ejecutivo incoado por la COOPERATIVA MULTIACTIVA COPROYECCION en su contra radicado bajo el número 2019-170, en el cual se decretó el embargo del 25% de su pensión de vejez, y desde julio de 2019 se le retiene por parte de Colpensiones dicho porcentaje.

Dice que desde que dio respuesta a la demanda en febrero de 2010 solicito el levantamiento de las medidas cautelares, reiterándolo en mas de seis ocasiones sin obtener respuesta alguna. Que suscribió un pagare con Vivecreditos quien lo endoso en favor de Alpha Creditos que no son cooperativas, ya que ambas son compañías de financiamiento. Que posteriormente ese pagare fue endosado a la cooperativa Multiactiva Coproyeccion quien fue la que solicito y obtuvo el aludido embargo siendo ilegal tal medida.

Señala que vulnera el art.156 del Código Sustantivo del Trabajo que prevee la inembargabilidad de las pensiones con excepciones de alimentos y créditos adquiridos en favor de cooperativas.

Dice que se llevo a cabo audiencia virtual en el citado proceso el 11 de mayo de 2021 y que se vio constreñido a aceptar el pago por mas de cincuenta y un millones de pesos y que su pensión continuara embargada hasta cubrirse ese monto y que concluida la diligencia se dispuso la entrega al demandante de cerca de 30 millones de pesos

que estaban retenidos del embargo para el proceso y mes a mes lo que se llegue a recaudar.

Solicita que a través de este mecanismo se tutelen los derechos fundamentales indicados, y se ordene dejar sin efecto el auto mediante el cual se decreto de manera ilegal y arbitraria el embargo de su pensión de vejez.

TRAMITE PROCESAL

Por auto de agosto 24 de dos mil veintiuno, se admitió la acción de tutela requiriendo a la parte accionada para que en el término de dos días se pronunciaran sobre los hechos y circunstancias que motivaron la acción constitucional.

CONTESTACION DE LA PARTE ACCIONADA

JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL

Da respuesta solicitando se rechace por improcedente la tutela por no cumplir con los principios de subsidiariedad e inmediatez que la regulan, como quiera que el accionante invoca la protección constitucional de un asunto netamente judicial cuyas actuaciones se han proferido con apego a los parámetros legales vigentes y respetando las garantías fundamentales del debido proceso, derecho de defensa y de contradicción. Igualmente, por utilizar esta acción constitucional de manera temeraria y de mala fe, al hacer manifestaciones que faltan a la verdad procesal, en torno a las actuaciones proferidas por la Juez, para entorpecer el desarrollo normal del proceso actualmente suspendido por el acuerdo de conciliación al que llegaron de manera libre y espontanea ambas partes en audiencia inicial (Art 372 CGP) el pasado 11 de mayo de 2021.

Señala que ante ese Juzgado se adelanta el proceso ejecutivo identificado con radicado No. 110014003055-2019-00170-00 en el que es demandante la COOPERATIVA MULTIACTIVA COPROYECCION y demandado el aquí accionante LUIS JAVIER MARTINEZ PEREZ, quien se notificó el 25 de febrero del 2020 de manera personal, presentando dentro del término legal contestación a la demanda, excepciones de mérito y previas, de las cuales se surtieron los tramites de rigor y se tomaron las decisiones conforme a la ley vigente, convocando a audiencia inicial de que trata el artículo 372 del CGP el 11 de mayo de 2021. Que En el desarrollo de la audiencia inicial antes mencionada, las partes de manera libre y voluntaria conciliaron la totalidad de la pretensiones del presente proceso en la cuantía de \$50.804.681 millones de pesos, cantidad de dinero que establecieron,

sería pagada por el demandado al demandante con el producto de los dineros retenidos y puestos a disposición del juzgado como consecuencia de las medidas cautelares vigentes así: la suma de \$26.174.554 millones existente a la fecha de la conciliación la cual se ordenó entregar de manera inmediata al demandante, y el saldo de \$24.630.127 millones de pesos se pagarían con las retenciones que por concepto de medidas cautelares se hicieran a favor del proceso de manera mensual hasta lograr el pago total de lo pactado; como consecuencia de ello las partes acordaron suspender el proceso hasta el 31 de diciembre de 2022.

Manifiesta que el demandado actuando en causa propia como abogado, hoy accionante, manifestó expresamente su voluntad de renunciar a las excepciones propuestas y a todo tipo de peticiones que hubiera presentado en su defensa, solicitando que ninguna de las partes fuera condenada en costas. Acuerdo de Conciliación que conforme a las facultades legales vigentes fue aprobado y notificado a las partes en audiencia, las cuales manifestaron estar conformes con dicha decisión. Cabe destacar que el demandado en dicha oportunidad nunca manifestó encontrarse en alguna circunstancia de indefensión que le impidiera cumplir las condiciones económicas pactadas.

Desde el 11 de mayo de 2021 fecha en que se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del CGP y en la que se aprobó el acuerdo de conciliación a la fecha de hoy 26 de agosto de 2021, este Despacho judicial no ha recibido ningún memorial o solicitud proveniente del demandado aquí accionante, en el que se pretenda controvertir alguna de las decisiones que se han proferido en esta instancia, ni tampoco las adoptadas en la audiencia de conciliación.

Dice que no se ha presentado por ninguna de las partes, demandante o demandado, escrito alguno que modifique las condiciones pactadas en el acuerdo de Conciliación, motivo por el cual éste se encuentra vigente. Que el proceso se encuentra suspendido conforme al plazo establecido en el acuerdo de Conciliación. Es decir, este Despacho está dando cabal cumplimiento a lo acordado por las partes.

Solicita se niegue la tutela.

CONSIDERACIONES:

De la Acción:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000.

Del caso Concreto:

Concorre a esta judicatura el señor LUIS JAVIER MARTINEZ PEREZ para solicitar se amparen los derechos fundamentales ya indicados y se ordene al Juzgado accionado, dejar sin efecto el auto mediante el cual se decreto de manera ilegal y arbitraria el embargo de su pensión de vejez.

El artículo 86 Superior establece que la tutela procede contra toda *“acción u omisión de cualquier autoridad pública”*. Los jueces son autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones tienen la obligación de ajustarse a la Constitución y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos reconocidos en la Constitución.

La alta corporación ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y se aparten de los mandatos constitucionales. No obstante, se ha precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo.

La acción de tutela contra decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez constitucional de una providencia que incurre en graves falencias, que la tornan incompatible con la Carta Política.

En reiterada jurisprudencia se ha dicho, que por regla general, la acción de tutela procede de manera subsidiaria y por lo tanto, no constituye un medio alternativo o facultativo, que permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley.

Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional ni evitar el agotamiento de la jurisdicción ordinaria o contenciosa, con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido consagrado para remplazar los medios ordinarios existentes.

Teniendo en cuenta los derechos que indica el accionante como vulnerados y con respecto al **Derecho del Debido proceso**, en las actuaciones judiciales, exige que todo procedimiento previsto en la ley, se adecue a las reglas básicas derivadas del artículo 29 de la Constitución, tales como la existencia de un proceso público sin dilaciones injustificadas, con la oportunidad de refutar e impugnar las decisiones, en donde se garantice el derecho de defensa y se puedan presentar y controvertir pruebas, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos procesales y de alterar las reglas mínimas de convivencia social fundadas en los postulados del Estado social de derecho .

El artículo 29 de la Constitución consagra el derecho al debido proceso, que se entiende como “la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables”. Tal derecho, siendo de aplicación general y universal “constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico”.

De los hechos narrados en la demanda de tutela, y la respuesta dada por el Juzgado accionado, el amparo impetrado ha de negarse, ya que el accionante, en la audiencia inicial contemplada en el art. 372 del CGP, llegó a un acuerdo conciliatorio con el demandante donde se estableció el monto de la deuda y la forma como se pagaría, y la suspensión del proceso. De tal suerte que a través de los descuentos que se siguen haciendo de su mesada pensional se pagaría la totalidad de la deuda, por tanto, lo pedido en tutela es improcedente, ya que hubo un acuerdo en el cual las dos partes en contienda demandante y demandado establecieron la forma en la que se pagaría el total de lo adeudado y eso precisamente recayó en los descuentos que se harían mes a mes de la pensión.

No es de recibo lo solicitado por el accionante de dejar sin valor el auto que decreto las medidas cautelares, por cuanto no debió entonces aceptar el acuerdo de pago con los descuentos que se harían de la pensión, ya que si no estaba de acuerdo con dichos descuentos por concepto del embargo, debió haber presentado otra propuesta de pago en la audiencia.

Dice el accionante que se esta vulnerando el debido proceso y el acceso a la justicia, lo cual no es de recibo, ya que en el tramite del proceso ejecutivo, y de la audiencia tuvo intervención ya que contesto la demanda, presento excepciones, el Juzgado dio el tramite que legalmente corresponde y el aquí accionante como demandado en el citado proceso en la audiencia, renuncio a las excepciones propuestas, por tanto no hubo negación alguna.

De lo actuado por el Juzgado 55 Civil Municipal, no se desprende vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante, y por consiguiente el amparo solicitado ha de negarse.

Por estas razones, no procede lo solicitado en tutela.

Por lo expuesto, el Juzgado veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE :

1.- **NEGAR** por improcedente el amparo constitucional al debido proceso, acceso a la administración de justicia, impetrado por LUIS JAVIER MARTINEZ PEREZ contra el JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA.

2.- Notifíquesele a las partes el presente fallo por el medio más expedito.

3.- Remítase el expediente, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:

Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Civil 027 Escritural
Juzgado De Circuito
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **33ca1e407a2f0b156c3476610cf7f9cb2cd968aac1f7bd8686a381c1fb96d1e1**

Documento generado en 06/09/2021 07:15:16 AM